

—José García Ramírez.—Luis María Aguilar, secretario.

Son copias. México, 24 de Octubre de 1874.—Enrique Landa.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Coahuila por D. Marcelino García Márquez, contra una orden del C. Presidente municipal de la Villa de San Pedro, por violacion de garantías.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Saltillo, Julio 10 de 1874.—Visto este juicio de amparo promovido por el C. Marcelino García Márquez, vecino de Matamoros de la Laguna, contra la orden del C. Presidente de la Villa de San Pedro, en la cual se le previene que se abstenga de hacer uso de las aguas con que se ha regado siempre el rancho de San Pablo, violándose en su persona, con dicha disposicion, las garantías que al hombre concede la Constitucion de 1857, en el art. 16, primera parte; el auto en que previo el informe de la autoridad responsable y pedimento fiscal, se mandaron suspender los efectos de la citada orden; las pruebas presentadas por el quejoso, así como las que la autoridad de San Pedro acompañó á su citado informe, y las demas providencias sentadas por el Juzgado en ausencia del quejoso y en consonancia con lo prevenido en la parte 2ª del art. 24 de la ley de 20 de Enero de 1869, hasta poner el citado juicio en estado de sentencia, la cual, sin audiencia del quejoso, fué dictada con fecha 20 de Octubre de 1873, sobreseyéndose en virtud de su abandono ó desistimiento tácito; la comunicacion de fecha 15 de Diciembre del mismo año, de la Suprema Corte de Justicia, devolviéndose dicho juicio para que se pronuncie sentencia en forma, previa la correspondiente sustanciacion

legal; el auto fecha 7 de Marzo de 1874 en que se dispuso dirijir comunicacion al Juez 1º Local de Matamoros de la Laguna, con el objeto de hacer comparecer al quejoso por sí ó por medio de apoderado instruido y expensado á continuar dicho juicio; y todo lo demas que de autos consta, debió tenerse presente y ver convino.

Considerando: Que el art. 16 de la Constitucion general, en su 1ª parte expresa terminantemente *que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento*:

Que por las constancias que obran en autos, aparece probado que el rancho de San Pablo, de que es arrendatario el quejoso, siempre ha pertenecido á la municipalidad de Matamoros y ha estado bajo la jurisdiccion de sus autoridades; siendo, por lo mismo, la orden dictada por el Presidente del Ayuntamiento de San Pedro, atentatoria á las garantías individuales que otorgan al citado García Márquez, el referido art. 16, supuesto que emana de una autoridad incompetente por falta de jurisdiccion sobre el quejoso, y que infiere á este una molestia en sus posesiones; la que como queda expresado no puede causarse al individuo sino por orden escrita de autoridad competente.

Que no es del resorte de este Juzgado examinar, ni mucho menos resolver la cuestion que sobre servidumbre, de las citadas aguas, se ha sostenido tanto por el C. García Márquez, como por la primera Autoridad política de la Villa de San Pedro, puesto que hacerlo seria invadir la soberanía del Estado, abrogándose atribuciones que son propias y exclusivas de los Tribunales de esta autoridad federativa.

Con fundamento, pues, en las anteriores consideraciones y en el art. 101 de la Constitucion general de la República y 1ª frác. 1ª de la ley de 20 de Enero de 1869 sobre juicios del amparo, se declara:

Que la Justicia de la Union ampara y protege á D. Marcelino García Márquez, contra la Orden fecha 13 de Febrero de 1873 dictada por el C. Presidente del Ayuntamiento de San Pedro, relativa á que no haga uso de las aguas con que se ha regado el rancho de San Pablo.

Notifíquese, comuníquese, sáquense las copias de estilo para remitir con este juicio á quien corresponda.

Así lo decretó, mandó y firmó el C. Juez de Distrito del Estado. Damos fé.—*Lic. Mariano Sanchez Peña.*—De asistencia, *Bernardo Laredo.*—*Antonio D. Treviño.*

Es copia que certifico. Saltillo, Julio 15 de 1874.—*Lic. Mariano Sanchez Peña.*—De asistencia, *Bernardo Laredo.*—*Sixto Zepeda.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Octubre 19 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Coahuila, por D. Marcelino García Márquez, vecino de Matamoros de la Laguna, contra una Orden del C. Presidente municipal de la Villa de San Pedro, que viola, en perjuicio del solicitante, una de las garantías consignadas en el art. 16 de la Constitucion de 1857; visto el informe de la autoridad responsable; el parecer fiscal y la sentencia del Juez de Distrito: con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitucion federal, se declara:

Que es de confirmarse y se confirma, por sus propios legales fundamentos, la sentencia del Juez de Distrito que otorgó el amparo al solicitante.

Devuélvanse estas actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia, para los efectos consiguientes, archivándose á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Su-

prema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Octubre 19 de 1874.—*Enrique Landa*, secretario.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato por Nicolás Lozarin, Rafael Manriquez, Abraham Oliveros, Antonio Rangel y Cristóbal Soto, contra el Cefe Político de Apaseo, que los ha condenado á quince dias de prision y á servicio de policía y limpieza de las calles y sitios públicos.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: Que habiendo creído haberse violado en sus personas las garantías individuales, los CC. Nicolás Lozarin, Abraham Oliveros, Cristóbal Soto, Antonio Rangel y Rafael Manriquez, han solicitado el amparo de la Justicia federal contra el hecho de habérseles impuesto la pena de desempeñar trabajos públicos, por el C. Cefe político de Apaseo.

La pena vino como consecuencia de no haber satisfecho la multa que el funcionario mencionado les impuso, con motivo de infracciones de los reglamentos de policía.

Arreglado el Código penal moderno al texto constitucional, manda que se hagan efectivas las multas sustituyéndolas con prision ó arresto.

Si así hubiera obrado por analogia el C. Prefecto de Apaseo, nada tendría de aten-